

Lecciones de la tensión fronteriza

Por Socorro Ramírez. Historiadora, doctorado en ciencia política, profesora titular del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales –IEPRI– Universidad Nacional, sede Bogotá.

ldramirezv@unal.edu.co

Colombia está obligada a ir al fondo de lo que se puso de presente con la reciente tensión fronteriza y a realizar los cambios que la situación nacional, y el contexto regional, le reclaman si quiere lograr la esquila compresión y cooperación de sus vecinos.

¿Continuar sólo con Estados Unidos y sin los vecinos?

Los dos últimos gobiernos, que han coincidido con la agudización del conflicto colombiano en las fronteras al haber involucrado a Estados Unidos para mejorar la capacidad de respuesta del Estado, fueron enajenando la voluntad de buena parte de los países vecinos, cuyos gobiernos ya no comparten la mirada sobre la confrontación colombiana que primó hasta mediados de los noventa. Como parte de los cambios políticos ocurridos en esos países, los asuntos de seguridad se ven con otro lente que incluye el rechazo a la presencia estadounidense en general y en particular en Colombia, así como el intento de aumentar los márgenes de autonomía frente al unilateralismo global de Washington.

Aunque con diferencias, los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe centraron su estrategia frente al conflicto y su orientación internacional en la relación con Estados Unidos, y no se preocuparon por construir una política de vecindad que partiera de la confrontación armada nacional con sus efectos e interacciones con los países colindantes, así como de las realidades que viven esas naciones y del contexto geopolítico regional.

Bajo Pastrana predominó un alejamiento de los gobiernos vecinos. Su gobierno no informó a aquellos que, como Ecuador, colinda con las zonas en las que se aplicaría en forma intensiva el Plan Colombia porque allí se habían concentrado los cultivos ilegales y el conflicto. Antes que interesarse por entender lo que pasaba en el vecindario, por años imperó en Colombia un estéril rechazo a esos cambios y hasta a las nuevas élites gobernantes, como sucedió con Venezuela.

Bajo Uribe se ha adoptado una posición más proactiva, se han realizado esfuerzos de acercamiento, búsqueda de acuerdos de seguridad e integración e impulso a proyectos energéticos, de infraestructura y hasta de conexión interoceánica con diversos países colindantes. No obstante esa actitud más proactiva, el compromiso de Uribe con las cruzadas antiterrorista y antinarcóticos de Bush, rechazadas en la región, y su propia concepción de seguridad, ha llevado a los vecinos de Colombia a reducir la política de seguridad democrática a la estrategia regional y global estadounidense y a ver la agudización de la confrontación sólo como resultado de esa política y de esa estrategia. Por esa vía minimizan la ofensiva de la guerrilla, desconocen que la fuerza de las Farc se deriva, no del apoyo social, sino de los

recursos del secuestro y la droga, y, al mismo tiempo, menosprecian la presión nacional al Estado para que responda esa amenaza. El rechazo se ha incrementado ante hechos como la detención unilateral de Granda en suelo venezolano y, sobre todo, con la incursión contra las Farc en territorio ecuatoriano. En esta última, la legítima defensa que el gobierno colombiano ha alegado, ha sido leída sólo en el contexto de la doctrina USA de la guerra preventiva contra el terrorismo.

La región no considera que el conflicto en Colombia se reduzca a narcotráfico y, menos aún, que se pueda inscribir en la cruzada antiterrorista que han asumido Estados Unidos, Europa y el Medio Oriente frente a Al Qaeda.

Lo que pasó en las tres reuniones que examinaron el caso con Ecuador es bien indicativo de los costos de atarse a las cruzadas estadounidenses y desconocer el contexto regional. El gobierno colombiano trató de mostrar que la soberanía no es sólo sobre los territorios, sino sobre las personas, amenazadas, en este caso, por un campamento en suelo ecuatoriano desde donde las Farc se protegían o atacaban. Intentó mostrar que todos los estados están obligados -resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU y Convención Interamericana contra el Terrorismo de junio 2002- a no financiar, albergar o proteger grupos terroristas. Pero no logró que en las resoluciones de la OEA se aludiera al terrorismo, a pesar de la presión que en ese sentido ejerció Estados Unidos, el cual terminó dejando una reserva a su voto. Esa mención sólo se encuentra en el comunicado del Grupo de Río cuando dice "Colombia considera a esas organizaciones criminales como terroristas", subrayando así la soledad del gobierno colombiano sobre el tema.

La región no considera que el conflicto en Colombia se reduzca a narcotráfico y, menos aún, que se pueda inscribir en la cruzada antiterrorista que han asumido Estados Unidos, Europa y el Medio Oriente frente a Al Qaeda. Los vecinos de Colombia –salvo Panamá y los centroamericanos- no han aceptado clasificar a las guerrillas de terroristas; más bien, los nuevos presidentes del istmo ya no son partidarios de mantener esa denominación y los gobiernos que por razones internas o por cercanía con Estados Unidos –como Perú y México- comparten la lucha antiterrorista, no se pronunciaron al respecto en ninguna de las tres reuniones.

En las sesiones predominó, además, el principio de soberanía por sobre la lucha antiterrorista o la legítima defensa porque la mayor parte de países latinoamericanos rechazan la imposición que Estados Unidos ha venido haciendo de sus intereses y estrategias, a pesar de que sus recetas ante la globalización y ante el problema transnacional de las drogas han fracasado y han generado altos costos para la región.

Además, Washington ha sido intolerante con los cambios que ocurren en algunos países de Suramérica y ha querido intervenir para ponerles límites. Asimismo, buena parte de la región tiene litigios territoriales pendientes y países como Chile trataron de aprovechar la ocasión para reafirmar la inviolabilidad del territorio como protección ante viejos o nuevos conflictos. Mientras tanto, Colombia, que enfrenta una guerrilla arcaica en sus propósitos pero ligada a redes globales y regionales, cuenta casi solamente con el apoyo de Bush, quien ya no tiene respaldo ni en su propio país.

¿Seguir con diplomacia presidencial, pero sin política de vecindad?

Colombia se juega buena parte de su suerte en rehacer los lazos con sus vecinos, no sólo porque la integración con América Latina y el Caribe son esenciales para el desarrollo nacional y para la búsqueda de una positiva inserción global, sino también porque la solución del conflicto, concentrado en las fronteras, requiere de la cooperación regional. Los que hoy existen no son propiamente entre los gobiernos centrales; esos vínculos están rotos o rodeados de mutuas desconfianzas y el discurso oficial de Colombia, antes que esclarecer la situación nacional, aumenta la incompreensión de los países colindantes. Pero los gobiernos colombianos que han tenido que hacerle frente a la agudización de la confrontación, en especial en las fronteras, antes que apoyar a las poblaciones que están estrechamente articuladas con sus vecinos y que tienen que buscar formas de sobrevivir en medio de los fuegos cruzados, han venido criminalizándolas y se ha enajenado su apoyo.

Colombia se juega buena parte de su suerte en rehacer los lazos con sus vecinos...

El gobierno colombiano desaprovechó, además, el apoyo que le brindaron todas las fuerzas legales nacionales ante la injerencia, las amenazas y el trato indebido que recibió de Chávez. En lugar de oír a la comisión asesora, Uribe la volvió el espacio de ajuste de cuentas con sus participantes. En vez de rodearse de personal capaz de entender lo que pasa en la región, paga favores políticos con nombramientos de personas que no sólo no saben de los temas ni les interesa aprender, sino que asumen el cargo diplomático como simple ventaja personal. En lugar de abrir la definición de la política exterior de manera que exprese mejor a la nación y de involucrar a quienes más podrían ayudar a que los países vecinos se aproximen a la complejidad del conflicto, descalifica sus críticas y propuestas.

Dentro de las muchas fortalezas del presidente Uribe y de su entorno no está un especial conocimiento sobre temas internacionales o regionales. Sin embargo, se mueven sólo a su leal saber y entender, no oyen ni a la cancillería y desprecian la diplomacia a la que conciben como un asunto de reuniones sociales y cocteles. La ausencia de una política exterior nacional, la carencia de un dispositivo internacional profesional y la confianza ciega en la diplomacia presidencial han generado no pocos errores, cuyos resultados están a la vista para quienes los quieran ver y aprender de sus lecciones.

Estos errores se hacen más graves, ya que el conflicto dejó de ser un asunto sólo doméstico y aumentó sus conexiones globales y tras la sacada de Chávez como intermediario para el intercambio, casi se vuelve regional. Cualquier política colombiana de hoy tiene una indisoluble dimensión internacional tan importante que es difícil dilucidar dónde termina lo doméstico. Por eso pensar sólo desde las encuestas de popularidad nacionales y no mirar el contexto regional e internacional, pueden convertir una victoria militar en una grave derrota política.

Un ejemplo reciente y cuyo mal uso puede transformar una oportunidad positiva en un revés diplomático, es el de los computadores de "Reyes". Luego del operativo en suelo ecuatoriano, Uribe le dio información parcial y tardía a Correa y confió a un general de la policía la denuncia del presidente vecino. Ante todo, tales informaciones han debido ser usadas como una herramienta para la discreta clarificación de la situación con un gobierno con el que venía desarrollándose un proceso de acercamiento. Al usarlas de entrada como instrumento de

confrontación, Colombia indujo la radicalización del gobierno ecuatoriano. En la cumbre de Río, Uribe abrió otro escenario distinto cuando señaló que "en lo que se ha encontrado hasta ahora, aparecen unos temas que debe investigar la justicia de cada país". Y al final de la cumbre, al desistir de llevar a Chávez ante la Corte Penal Internacional con las informaciones de los computadores, el gesto permitió el comienzo de la normalización de las relaciones con Venezuela. Con Ecuador, en cambio, el error de El Tiempo de no verificar la filtración policial, llevó al gobierno de ese país a denunciar una campaña mediática en su contra y un intento de justificar la violación de su territorio, así como a condicionar la normalización de las relaciones diplomáticas a no vincularlo más con las Farc.

...pensar sólo desde las encuestas de popularidad nacionales y no mirar el contexto regional e internacional, pueden convertir una victoria militar en una grave derrota política...

Esas informaciones, así sean un importante indicador de lo que acontece, no constituyen plena prueba judicial. Por eso, el gobierno colombiano debe sopesar su manejo en el marco de una política claramente definida hacia los vecinos para que los acontecimientos no lo atropellen una vez que la Interpol termine el examen de los computadores, el próximo 30 de abril. Ya el canciller venezolano señaló: "Nunca aparecerá una prueba de que hemos tenido políticas de convivencia ni de apoyo a ninguna de las guerrillas en Colombia". Y el secretario de la OEA ya está sobre el tema y dijo a Telesur: "¿Por qué razones cree que lo que está allí es verdad? Porque puede haber falsificaciones, no sólo materiales, sino también ideológicas. La Interpol va a decir si esas computadoras tenían esa información antes del 1º de marzo y si no ha sido manipulada ni alterada. Lo que la Interpol no puede asegurar es que la información de Reyes o de quien fuera, sea cierta".

Si fuera Washington el que se apropia de esas informaciones para amenazar a los vecinos, se perdería una oportunidad para avanzar en la clarificación de una grave situación y aumentaría su repudio. Ya Ecuador pidió una OEA sin Estados Unidos y habló de "la rebelión del continente"; Lula, al tiempo que propuso un consejo de seguridad suramericano, advirtió a Condolezza que "las crisis diplomáticas suramericanas deben ser resueltas en la región", y la región aprovechó la ocasión para frenar a Estados Unidos y a su aliado, Colombia.

Para que Colombia logre la indispensable cooperación de sus vecinos en su esfuerzo por terminar este conflicto prolongado y degradado, es indispensable aferrarse al derecho internacional como había sido su tradición. También es una necesidad aprovechar la nueva situación estadounidense para tomar distancia de Bush, construir una política exterior de consenso y garantizar su desarrollo profesional, consolidar lazos sociales con los vecinos, reconstruir las relaciones diplomáticas y aprovechar las victorias militares para concretar el acuerdo humanitario que permita empezar a transitar el largo camino de la paz.